



Boletín del

# Comité de Enlace por la Reconstrucción de la IV Internacional

Publicación del Comité de Enlace por la Reconstrucción de la IV Internacional - Versión en Español - Agosto de 2012

**Balance del XLV Congreso del POR**

## El vigor programático del POR

### En esta edición:

- **Brasil: Conquistar la independencia de clase del proletariado**
- **Argentina: ¿Por qué caracterizar al gobierno de Kirchner como proimperialista?**
- **Argentina: La tarea: expropiar sin pago toda la industria hidrocarbonífera, desde los yacimientos hasta las refinerías y la distribución, bajo control obrero colectivo**
- **Golpe de Estado en Paraguay - Por un tribunal Popular para castigar los asesinos y entregar la tierra a los campesinos**

## A César Lora e Isaac Camacho

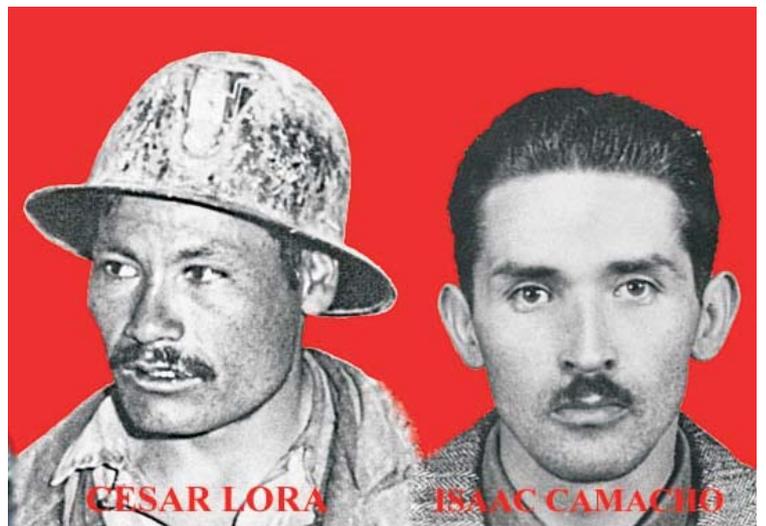
Dedicamos este Boletín del Comité de Enlace a Cesar Lora e Isaac Camacho.

El 29 de julio de 1965, Cesar Lora fue ejecutado en el Valle de San Pedro (Bolivia), por órdenes del gobierno. El dirigente minero de Siglo XXI se transformó en blanco de la reacción, junto con su compañero Isaac Camacho por dirigir el movimiento del proletariado y por militar en el Partido Obrero Revolucionario (POR). El 29 de julio de 2012 se completaron 47 años de su asesinato. En julio de 1967, Isaac Camacho tuvo el mismo destino que su camarada.

Los mártires del POR viven en el programa del Partido, en la militancia revolucionaria y en el proletariado.

**Viva César Lora!**

**Viva Isaac Camacho!**



## Presentación

Lo días 7 y 8 de julio, se reunió en Cochabamba el Congreso del Partido Obrero Revolucionario (POR) de Bolivia. En este boletín presentamos un breve balance del mismo. E día 8, se reunió el Comité de Enlace.

Los camaradas bolivianos propusieron que las demás secciones hagan sus consideraciones sobre el Congreso. Hubo concordancia de que el Partido está coheso en la caracterización de los principales elementos de la situación prerrevolucionaria que Bolivia enfrenta. Las divergencias fueron puntuales.

Uno de los aspectos más ricos del debate fueron los cambios que están ocurriendo en el país con el desarrollo de la clase obrera fabril, al lado del estratégico proletariado minero y a la expansión de la agroindustria. Otro se refirió a la tarea del POR encarnar físicamente la dirección del proletariado y las masas oprimidas en general. El acierto en la caracterización del gobierno de Evo Morales, con las debidas correcciones, impuestas por la situación concreta, como el despertar de ilusiones democráticas entre los campesinos y su rápido agotamiento, constituye un valioso capital político del POR. Por eso es destacable el hecho del gobierno elegir a los trotskistas como sus verdaderos enemigos de clase y haber decidido combatirlos con todo vigor. La seguridad del Partido se transformó en un asunto fundamental.

Está claro para la militancia que la crisis económica y política se desarrolla en ritmo acelerado y que solo el marxismo-leninismo-trotskismo puede unir a los explotados sobre la base del programa de la revolución y dictadura proletarias.

La división y el corporativismo, manifestados en innumerables manifestaciones, se agotan en sí mismas y no pueden resolver la cuestión esencial del poder. El gobierno tiende a postrarse cada vez más frente a la gran propiedad y al imperialismo, mientras los diversos sectores explotados se chocan con el Estado cada vez que salen a la calle, en los bloqueos de rutas, en la toma de rehenes, etc. En este sentido fue sintomática la radical huelga de los policías.

El Congreso señaló con precisión la tarea del Partido de expresar el programa de transición de la revolución boliviana. Las dificultades de organización del Comité de Enlace perjudican el trabajo des-



En Bolivia, las masas chocan con el gobierno impostor de Evo Morales



Crisis capitalista: empleos amenazados. Responder con las banderas y métodos de lucha del Programa de Transición

tinado a quebrar el aislamiento del POR y, por tanto, del proletariado frente al movimiento revolucionario mundial.

La reconstrucción de la IV Internacional es el objetivo histórico impostergable. La crisis mundial de dirección se manifiesta contundentemente frente a la crisis estructural del capitalismo y frente al cambio del estado de ánimo de los explotados en todas partes.

La multitudinaria lucha de campesinos, indígenas, artesanos, asalariados y policías en Bolivia es parte del movimiento general de las masas contra las nefastas consecuencias del capitalismo putrefacto.

El Comité de Enlace debe funcionar embrionariamente como un solo partido <sup>o</sup> embrión de reconstrucción de la IV Internacional, del Partido Mundial de la Revolución Socialista. Este objetivo debe condicionar la relación de las secciones en el próximo periodo. En la reunión también se resolvió organizar una escuela de cuadros contemplando dos puntos: El internacionalismo y sus problemas prácticos; la concepción marxista de la educación y sus problemas prácticos. A pesar de las dificultades financieras las secciones se esforzarán por realizar la segunda escuela de cuadros del Comité de Enlace (la primera se realizó en Buenos Aires-Argentina). El segundo punto fue la elaboración de la pauta del Boletín Internacional de Comité de Enlace. Los informes de las secciones fueron presentados durante el Congreso, faltando apenas transformarlos en tesis políticas para el Boletín Internacional. La sección brasilera presentó una resolución sobre el asesinato de campesinos y el golpe de estado en el Paraguay. Esta hecho pasó a constituir parte del Congreso, donde fue leída y aprobada una Resolución del Comité de Enlace.

Como la militancia revolucionaria y los lectores en general pueden apreciar, las actividades del Congreso del POR fueron ricas en discusiones y formulaciones. Este Boletín Internacional publica los puntos resumidos en esta presentación. Convocamos a la militancia a concentrarse en el esfuerzo de auxiliar al POR en su objetivo de organizar a las masas alrededor del proletariado para derrotar al gobierno burgués de Evo Morales y conquistar el poder político. Convocamos a la militancia a trabajar por la superación de las crisis de dirección aplicando el Programa de Transición de la IV Internacional.

## Balance del XLV Congreso del POR

# El vigor programático del POR

No pocos agoreros, anunciaron que tras la muerte de G.Lora, el POR Boliviano tenía los días contados, condenado a extinguirse por rumbos perdidos, disputas y crisis internas, en torno al gigantesco legado teórico dejado por el cda Patricio.

La discusión interna y las conclusiones del reciente XLV Congreso del POR, son evidencia de todo lo contrario. Muestran un partido preocupado, acuciosamente, en aplicar el programa y el método marxista para precisar con la mayor exactitud posible la comprensión de las modificaciones, avances y retrocesos que se vienen produciendo en la cambiante situación política de un país capitalista atrasado que vive las consecuencias de su tardía incorporación a la economía mundial y que forma parte de ella, a pesar de su atraso.

Los militantes, en sus células y a través de ellas, ponen a prueba la línea elaborada, corroboran en su actividad de organizar y penetrar en las masas, la validez o deficiencia de las políticas desarrolladas, discuten los ajustes necesarios y apuntan conclusiones que han permitido al XLV Congreso aprobar importantes actualizaciones al programa del Partido. Se somete a severa autocritica los errores cometidos para rectificarlos sobre la base de comprender su raíz política.

El acierto del POR al haber caracterizado al gobierno del MAS como un gobierno burgués, se traduce hoy en el fortalecimiento político y orgánico del Partido, las masas que han agotado su experiencia política bajo el gobierno del Presidente “indígena” administrador circunstancial del Estado Burgués, al que le han agregado el calificativo de “plurinacional”. Estado, que la demagogia MASista pretendió presentar como el más democrático e incluyente del mundo, construido sobre la base del

respeto a todas las formas de propiedad privada, que determinan la vigencia y predominio de las relaciones capitalistas de producción y en esa medida, condenado a reproducir y perpetuar las condiciones de atraso, miseria y opresión de la mayoría nacional.

Irremediamente, tal como en su momento fue anticipado por el Partido, el gobierno ha concluido chocando con las masas explotadas que hasta ayer depositaron sus ilusiones en el.

La realidad se ha encargado de desnudar las falacias “teóricas” del subjetivismo indigenista postmoderno de los ideólogos del MAS.

“El Partido, partiendo siempre del programa en su análisis sobre la economía combinada, pone en evidencia que

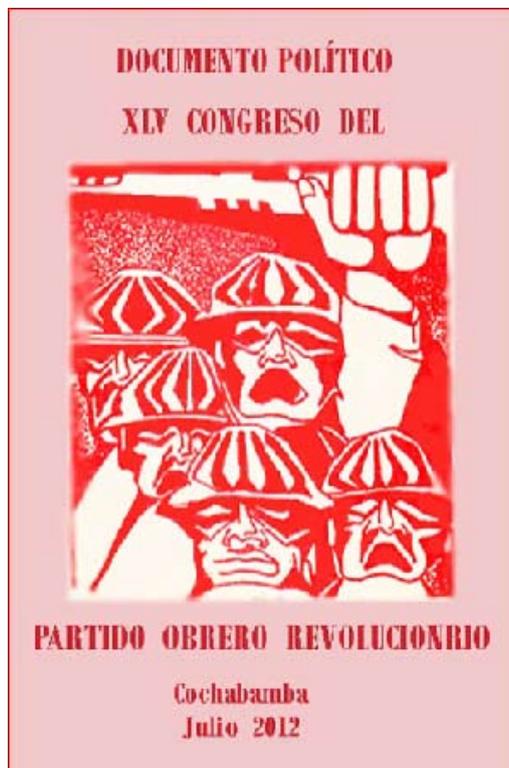
el comportamiento de las diversas formas de propiedad existentes en el país, no es precisamente recíproco, complementario y armónico...”. La historia del país está plagada del permanente enfrentamiento entre todas estas formas de propiedad. La propiedad privada se ha ido afianzando sobre la base de la destrucción de la propiedad comunal de la tierra, los pequeños propietarios han vivido enfrentados y avasallados por los grandes propietarios, etc. Estas contradicciones que se desarrollan en la base económica del país constituyen el fundamento material de la lucha de clases y sus peculiaridades.

“Para los revolucionarios estuvo siempre claro que estas ilusiones habrían de desvanecerse necesariamente al chocar con la incapacidad del gobierno, respetuoso de la gran propiedad privada burguesa, para atender sus necesidades, proceso que se ha dado más rápido de lo que podíamos imaginar. La imagen de “gobierno del pueblo”, la falacia del “proceso de cambio” se desvanecen como por arte de magia e ingresamos a una nueva situación política que Lenin caracterizó como revolucionaria.

Esta nueva situación contrasta con la inmediatamente anterior cuando las ilusiones en el “proceso de cambio” de Evo se tradujeron en masivo apoyo y en contención de las demandas de los oprimidos. Ahora, esfumadas estas ilusiones, las masas desilusionadas se separan de la tutela del MAS y se rebelan contra el gobierno, ganan las calles y los caminos recurriendo a la acción directa, cada vez con más furia para imponerle al gobierno impostor sus demandas. Ya nada esperan de él, se han independizado.”

En el plano de la situación mundial el documento aprobado va subrayar la constatación de que: “....., la

reacción de las masas oprimidas que se niegan a cargar con el fardo de la crisis generada por el capital financiero, ha adoptado formas y métodos de los más diversos, pero que tiene en común la movilización y la acción directa de las masas en las calles; los hechos confirman la apreciación del CERCÍ en torno al desarrollo de una nueva etapa de la lucha de clases a nivel mundial, lo trágico es que los atisbos de una incorporación física e independiente del proletariado en las convulsiones sociales emergentes de la crisis, no se desarrollan, en la mayoría de los casos el proletariado está disuelto en el conglomerado de las masas movilizadas; los acontecimientos ponen en evidencia la dramática ausencia de una dirección revolucionaria capaz de afianzar la independencia de clase del proletariado y conducir a las masas al derrocamiento del



sistema capitalista en descomposición y su sustitución por el socialismo. Al no encontrar una salida revolucionaria, estos movimientos se agotarán en la impotencia si es que no terminan capitalizados por corrientes burguesas reformistas o derechistas, disfrazados de presuntos salvadores....”

Para concluir que:

“La tarea impostergable de sepultar definitivamente el cadáver putrefacto del capitalismo, sólo puede ser obra del proletariado revolucionario, organizado en partido mundial, con sus respectivas secciones nacionales, capaces de liderar a las masas oprimidas que se rebelan contra el sistema burgués decadente. Este partido programa, que se desarrolla en el seno de las masas proletarias y oprimidas en general, que es capaz de conocer la realidad que pretende transformar (programa), que es capaz de dar expresión política al instinto comunista del proletariado, que se estructura en células de cuadros revolucionarios, cuyo eje es el centralismo democrático, es, como se ve, todo lo contrario a las capillas de aventureros y oportunistas que pululan por el mundo. En la tarea de ponerlo en pie se resumen los problemas fundamentales de la revolución social en nuestros días.”

No es para nada casual, que precisamente, en los días en que se desarrolló el XLV Congreso del POR el Ministro de

Gobierno se haya encargado en “denunciar® al POR como el presunto responsable de la convulsión social en el país, culpable de todo, desde el motín policial hasta la marcha por el TIPNIS, del conflicto de salud, del magisterio, de las universidades, de los fabriles radicalizados, etc. El hecho, por el contrario, da una medida de que las masas marchan al encuentro de la política revolucionaria que, juzgan, interpreta sus intereses de emancipación.

El documento aprobado en el Congreso concluye señalando:

“Siguiendo a Trotsky diremos que nos encontramos ante una situación prerrevolucionaria dentro del proceso de desarrollo de la situación revolucionaria.

Está claro entonces que al caracterizar el cambio político que se ha operado, lo que a los revolucionarios debe importarnos es asumir la tarea de organizar políticamente el descontento popular bajo la perspectiva de la revolución proletaria, sólo así la situación revolucionaria podrá derivar en revolución socialista.”

El XLV Congreso del POR da una medida del vigor programático del partido, de su vigencia como dirección política de la Revolución Boliviana. Los agoreros pueden seguir esperando sentados la “anunciada” crisis disgregadora, el POR pisa y pasa.

## La rebelión policial

La policía y las FF.AA. en toda sociedad clasista son parte del aparato estatal, concentran la fuerza compulsiva del Estado para preservar el orden social burgués cuyo basamento es la gran propiedad privada de los medios de producción.

En Bolivia la policía (también las FF.AA), particularmente la tropa y los oficiales de baja graduación, perciben salarios de hambre. Palian sus bajos salarios con coimas, sobornos y exacciones.

La policía y las FF.AA. son criaturas de la clase dominante cuya incapacidad y debilidad se refleja en su incapacidad para sostener un aparato represivo de elite que sea garantía de total fidelidad y disciplina según la máxima que señala que este tipo de instituciones no deliberan y sólo obedecen.

Nuestros policías y oficiales son parte del pueblo oprimido y en tal medida soportan la presión de la lucha de clases. La disciplina vertical frecuentemente se resquebraja bajo la presión de la lucha de clases y sus necesidades insatisfechas.

Los revolucionarios estamos en la obligación de orientar a los explotados y particularmente la clase obrera en sentido de que corresponde no sólo apoyar decididamente las demandas de los policías sino ganarlos a la lucha nacional contra el hambre y la miseria.

La rebelión de la policía es una expresión más de la situación revolucionaria que se desarrolla en el país. La presión de la movilización de masas actúa poderosamente sobre la disciplina de la policía y las FF.AA. en la perspectiva de anularla, única forma en que la tropa, suboficiales y jóvenes oficiales puedan pronunciarse libremente a favor de la lucha revolucionaria del pueblo trabajador.

El amotinamiento policial, su fusión con la lucha calle-



jera de los oprimidos a los cuales generalmente reprimen, no puede ser mejor síntoma de que la revolución social se acerca y que la burguesía esta próxima a ser correteada y expulsada por caduca e incapaz. La revolución social no podrá darse si antes los explotados no ganan a su campo a la tropa y oficialidad joven del aparato represivo del Estado.

El proceso revolucionario se apoya en esta descomposición para ganar ideológicamente a policías y soldados y convencerlos que la solución a sus problemas está en dar la vuelta su gorra abriendo las unidades policiales y militares para que los trabajadores se armen y consumen, en el momento adecuado, la insurrección armada.

Como dijimos cuando el motín policial de 2003, la policía ya nunca volvería a ser la misma, delibera, ha quebrado la cadena de mando y recurre a la acción directa para reclamar por sus derechos.

## Brasil

**Conquistar la independencia de clase del proletariado**

*Obreros de la General Mortors durante manifestación en la Via Dutra para defender sus empleos*

El desarrollo de la crisis económica se presenta como el principal problema para la clase obrera y los demás explotados. El gobierno petista de Dilma Rousseff no puede esconder que las tendencias recesivas mundiales arrastran al Brasil para el precipicio. La burguesía no tiene otra solución sino sacrificar empleos y golpear las condiciones de vida de la mayoría oprimida. La burocracia sindical sometió las organizaciones de masas al gobierno y al gran empresariado. Las multinacionales que controlan los ramos fundamentales de la economía señalizan que los despidos son inevitables, en caso que la caída del crecimiento continúe profundizándose. Algunos sectores ya cierran puestos de trabajo.

Los explotados deberían estar preparándose para resistir a los ataques generalizados del capital. Sin embargo, sus sindicatos vienen sirviendo de instrumentos de colaboración, bajo la dirección de la burocracia cutista (PT) e fuerzista (PDT). Las fracciones de la burguesía se movilizan para protegerse de la recesión. El gobierno actúa bajo presión para responder a las exigencias de las multinacionales. Y la burocracia sindical se doblaga a los pleitos empresariales y mantienen los asalariados sometidos a las directivas burguesas.

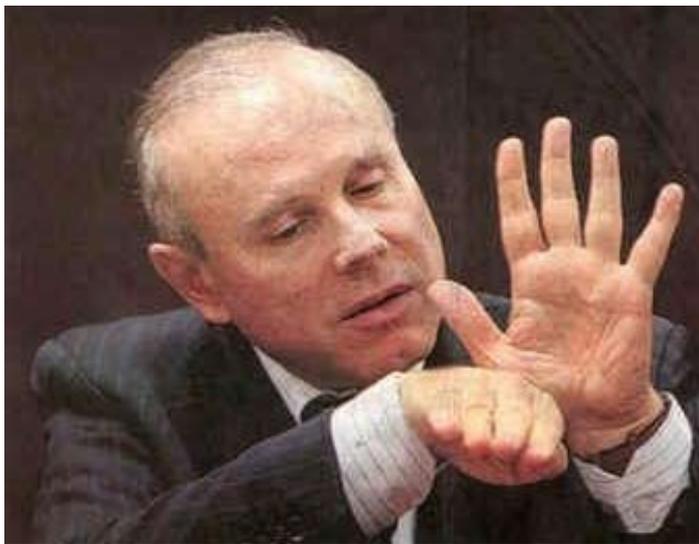
Esas son las principales contradicciones de la situación.

1. El Ministerio de economía preveía, en el inicio de 2012, un crecimiento de 4,5%. El optimismo no duró mucho. Las previsiones sombrías de instituciones nacionales e

internacionales vienen confirmándose. El mercado interno no puede absorber más la producción acelerada. Las exportaciones de manufacturas, que ya eran raquíticas, encogieron, aunque el Real se desvalorizó en un 20% en relación al dólar. Y las de commodities (materias primas y productos agroindustriales) no pueden sostenerse debido a la desaceleración de China, la recesión en Europa y la estagnación en los Estados Unidos. Así, la balanza comercial sufrió una caída del 45%, en relación al año pasado. De conjunto, se volvió inevitable el crecimiento de excedentes en la industria. La Economía brasilera, de ese modo, se apoya en la agro-exportación y en el sector terciario.

El gobierno fue obligado a rever sus cálculos. Ahora, estima un crecimiento de 2,5%. Otras instituciones señalan que será del 1% a 2%. No quedan dudas que el ciclo de crecimiento que abarcó los dos mandatos del gobierno Lula se cerró con la implosión de la crisis mundial, abierta en los Estados Unidos en 2008.

2. El termómetro de la crisis se encuentra en los ramos industriales controlados por el capital multinacional. El sector de autopartes despidió 5.500 metalúrgicos solamente en los últimos meses. La poderosa General Motors anunció el despido de 1.500, en la planta de São José dos Campos (San Pablo). La Mercedes Benz de São Bernardo (San Pablo) suspendió más de 1.000 obreros por varios meses. Las montadoras, en general, utilizan las vacaciones colectivas, banco



*El ministro Mantega expresó la posición del gobierno Dilma de defensa de las multinacionales*

de horas y programas de “renuncias voluntarias” (PDVs). El ataque del gran capital a los empleos, salarios y derechos laborales está en pleno vigor. Se justifica que la caída de 5,3% en los últimos doce meses obliga a una readecuación en la capacidad productiva.

Los despidos en masa no determinaron aún la situación política del país, debido a las concesiones que el gobierno Dilma hizo a las multinacionales. Pero con la retracción en 14 de los 27 ramos de la industria, ya no se está contratando y la perspectiva es de cierres masivos de puestos de trabajo.

La defensa del empleo se plantea como punto de partida del choque entre la política burguesa y la proletaria frente a la desintegración del capitalismo.

3. La intervención del estado consiguió evitar una caída más abrupta y profunda del consumo y la producción. Sin embargo, esta intervención fue incapaz de contener las tendencias recesivas, que son de orden mundial. La gigantesca crisis de sobreproducción actúa por encima de las fronteras nacionales. Ningún gobierno tiene como desviarla. No por acaso, las tentativas de coordinación mundial (G-7, G-20, UE, etc.) no hicieron sino interferir en el ritmo del desarrollo de la crisis. Su horizonte es de amplia destrucción de fuerzas productivas.

En éste momento, a economía europea esta de cara a ese fenómeno. China indica que no continuará como muro de contención de la economía mundial. Brasil se resiente del estrechamiento del mercado internacional y, particularmente, del chino. El proteccionismo gana fuerza. Los desencuentros entre las burguesías vecinas –argentina y brasilera-, en el Mercosur, son buenos ejemplos de los antagonismos.

Las multinacionales ocultan sus intereses imperialistas, presionando el gobierno a apoyarlas como si fuese en defensa de la industria nacional. Las concesiones fiscales y crediticias del último período sumaron 102 mil millones de reales, correspondientes a un mes de recaudación tributaria. Se dilapida dinero público y se agrava la deuda interna en función de la preservación de las ganancias del gran capital.

Sin embargo, apenas se retarda la marcha de la recesión.

4. La burocracia sindical actúa en sintonía con el gran capital. Pregona que la clase obrera no tienen una política y un programa propio para enfrentar la crisis. Defiende que los acuerdos entre explotadores y explotados, por medio de los sindicatos, son la vía más favorable para preservar los empleos y los salarios. De esa forma, los sindicalistas tienen la tarea de negociar con la dirección de las multinacionales la reordenación de la producción. La “flexibilización” de los derechos laborales es tomada como un campo propicio para los acuerdos.

Los sindicatos se presentan como co-partícipes del planeamiento capitalista. Los negociados de cúpula dan la impresión de que los burócratas tienen poder frente a la burguesía. La huelga es indeseable y siempre el último recurso. Cabe a los capitalistas, si quieren que ésta ocurra o no. Si actuasen de forma unilateral, podrán enfrentar el descontento de los obreros. Si negocian las soluciones, contarán con la comprensión de los burócratas, que harán de todo para convencer a las bases que la huelga es negativa.

Los metalúrgicos perdieron miles de puestos de trabajo con la llamada reestructuración productiva, implementada desde la década del 90. El Sindicato Metalúrgico del ABC tomó la primera línea de los acuerdos flexibilización. El impulso de la industria automotriz en los últimos diez años permitió a la burocracia engañar a los obreros con la idea de desarrollo sustentable, promovido por el gobierno Lula. Lo que ya no es posible.

Ahora, el argumento se centra en la propaganda de las medidas de protección de la industria nacional y sobre el rol de los acuerdos con las multinacionales para preservar empleos. Los capitalistas se aprovechan de los incentivos y alimentan la disposición de la burocracia a colaborar. No hay, sin embargo, ninguna seguridad de que la sobreproducción no continúe agravándose y las multinacionales tengan que despedir en masa. Temerosos de lo que pueda ocurrir, los metalúrgicos se mantienen a la espera. Lo que es bueno para los capitalistas y favorable a la política de conciliación de clases de la burocracia.

Se trata de demostrar a los explotados los peligros del avance de la crisis y la traición de los líderes sindicales sirvientes.

5. El gobierno está obligado a sacrificar las condiciones de vida de los explotados. Uno de los aspectos del plan anticrisis es el de “rebajar la indemnización por despidos”. Se abrió una puerta para eliminar conquistas. La reducción de la contribución patronal para la jubilación de los trabajadores en varios sectores de la industria será motivo de nuevos ataques a los derechos previsionales. El salario mínimo fue perdiendo espacio en la política reformista de “distribución de riqueza” del PT. En éste año, el reajuste sufrirá una frenada.

Los estatales comenzaron a sentir el peso de la directriz anticrisis del gobierno Dilma. La orden de los Ministros de Economía y de Planificación es reducir gastos públicos. El corte presupuestario golpea varios sectores, principalmente

salud y educación. Esta ahí el porqué el gobierno enfrenta la larga huelga nacional de las universidades públicas federales y ahora también la de varios sectores de los funcionarios federales, sin presentar una vía para la burocracia desmontarla. Cualquier concesión alimentará la disposición de huelga en otras unidades e instituciones del estado y afectará las necesidades de subsidio a las multinacionales y bancos debido a la crisis económica, como afirmó el propio Ministro Mercadante. Hace poco el gobierno tuvo que sofocar la huelga de la policía en los estados de Bahía y Río de Janeiro, que iba a camino de extenderse a los demás estados de la federación. La dura represión a los estudiantes de la Universidad Federal de Guarulhos (UNIFESP, San Pablo), con invasión policial del predio y la prisión de la vanguardia combativa, evidenció la inflexibilidad de Dilma a las reivindicaciones.

Las huelgas obreras en las obras del PAC fueron las que mas indicaron las dificultades del gobierno petista. Para proteger a las empresas constructoras, golpeó a los huelguistas en Jirau, Santo Antonio e Belo Monte usando la Fuerza Nacional de Seguridad.

Esos acontecimientos de la lucha de clases son apenas síntomas de la tendencia del gobierno petista a chocarse con las masas.

6. El movimiento campesino retrocedió bajo el gobierno Lula y se encuentra debilitado. El crecimiento económico del período 2003-2008 creó empleos en la agroindustria, facilitando la desmovilización de los campesinos sin tierra. Lo fundamental, sin embargo, está en el hecho del movimiento limitarse a presionar el gobierno para comprar tierras y promover los asentamientos.

Ese reformismo mezquino se vincula a una cuestión superior estratégica. El movimiento campesino no se organiza alrededor de un programa por la revolución agraria, que exige la convergencia de las masas campesinas con el proletariado. La propiedad latifundista y la agroindustrial someten millones de pequeñas propiedades campesinas. No hay como romper ese dominio estructural sin que el proletariado convenza a los campesinos de la necesidad de una alianza revolucionaria de clases.

¡Como hacerlo, si a clase obrera no tiene su partido, conserva la dispersión y el atraso político y los campesinos se encuentran condicionados por el reformismo pequeño-burgués!

El PT y su gobierno se aprovechan de esta contradicción histórica para mantener la dependencia de los explotados urbanos y de los oprimidos del campo a la política burguesa. La cuestión está en saber hasta que punto la crisis afectará la agroindustria derribando la producción agrícola. Esta incógnita será resuelta a corto plazo. Bajo el impacto de quiebras, los campesinos tendrán que retomar la ofensiva de la lucha de clases.

La perspectiva de las clases explotadas y oprimidas es la

de ubicarse en el mismo campo de la lucha por las reivindicaciones vitales y agrarias.

Para combatir estas tendencias el Estado desencadena una ofensiva represiva a los movimientos. La acción policial, la aplicación de la ley anti-huelga, los sumarios y despidos por motivos políticos, los asesinatos de dirigentes campesinos, expresan la ofensiva represiva que se descarga contra los movimientos sociales insurgentes. La represión es usada para facilitar que se descargue sobre las masas los efectos de la crisis. La lucha por las reivindicaciones está vinculada al combate contra la represión.

7. Las reivindicaciones transitorias surgen de las condiciones de desmoronamiento del capitalismo. El atraso del proletariado en asumir la dirección del movimiento social no debe confundirse con la inexistencia de una política y programa proletarios, como pretende la burocracia sindical.

El Programa de Transición de la IV Internacional no sólo mantiene su vigencia, como también se muestra indispensable para organizar a las masas en la situación de crisis estructural del capitalismo. Parte de las necesidades más elementales de los explotados para que avancen contra la propiedad privada de los medios de producción y el Estado burgués, basados en la experiencia y en la unidad de la mayoría nacional oprimida.

Frente a los despidos que se vienen y del crecimiento del desempleo, reivindicaciones como estabilidad en el empleo se combinan con la defensa de la escala móvil de las horas de trabajo y el control obrero

de la producción. Frente a la sobreexplotación y la pobreza de la mayoría, se trata de luchar por el salario mínimo vital con escala móvil de reajuste.

La emancipación de los sindicatos del control de la burocracia y la superación de la fragmentación del movimiento obrero en una decena de centrales es parte de la lucha por las reivindicaciones transitorias. No existe posibilidad de la clase obrera unirse en torno de sus reivindicaciones si no pasa por arriba de los aparatos burocráticos estatizados. Los sindicatos tendrán que ser recuperados y transformados en órganos de la democracia revolucionaria.

La bandera de la independencia de la clase obrera frente a la burguesía y su estado se expresa en el enfrentamiento con la burocracia, las corrientes reformistas, estalinistas y centristas. Ciertamente, sin confundirlas. Por el momento, el obstáculo más poderoso se encuentra en la burocracia de la CUT y de la Fuerza Sindical. Los obreros –especialmente su vanguardia reunida en los metalúrgicos y concentrada en las grandes fábricas– avanzarán en el camino de la independencia experimentando las traiciones de sus direcciones.

Es decisivo fortalecer el trabajo de penetración del programa de Transición en el seno de la clase obrera y construir el partido marxista-leninista-trotskista.



*Juzgamiento del "mensalão" en el Superior Tribunal Federal: disputa interburguesa, el PT en el banquillo de los acusados*

## ¿Por qué caracterizar al gobierno de Kirchner como proimperialista?

Es sumamente importante definir el carácter de clase del gobierno que se determina por su posición frente al régimen de propiedad privada de los medios de producción. Es de gran importancia porque no pocos caracterizan al gobierno como *popular*, de la *mayoría*, *nacionalista*, *de todos*, sin detenerse a señalar qué clase representa, qué clase defiende. El gobierno mismo se ha definido a sí mismo como defensor del régimen capitalista, interesado en desarrollar una burguesía en serio, al que le parece bien que los empresarios ganen mucho dinero y hasta *que la junten con pala* como dice la Presidenta.

Todos los gobiernos burgueses tienen en común la defensa del régimen de la propiedad privada, sin embargo no podemos decir que sean todos iguales. No es lo mismo el gobierno de Alfonsín que el de De la Rúa, como tampoco el de Menem y el de Kirchner, aunque los dos primeros fueran radicales y los últimos dos peronistas. Pero el hecho fundamental que marca un giro en la política burguesa es la violenta irrupción de las masas en 2001/2. Como ya hemos señalado anteriormente, buena parte de la política kirchnerista fue adelantada por Rodríguez Saa en su paso fugaz por la presidencia, a fines de 2001, hablando en la CGT, recibiendo a las organizaciones piqueteras y de derechos humanos, declarando el default<sup>1</sup> de la deuda externa.

La burguesía nacional tiene roces, algunas veces superficiales y otras veces agudos con el imperialismo, en la disputa por la apropiación de la plusvalía. Argentina es una semicolonias del imperialismo, un país oprimido, sometido. Por eso es necesario definir qué relación tiene con el imperialismo, con el capital financiero.

¿Cómo se expresa la dominación imperialista? Fundamentalmente por la presencia de multinacionales controlando las principales ramas de la economía nacional, dominando el comercio exterior. Miles de millones de dólares se siguen pagando a la banca internacional en concepto de intereses cada año. Al FMI, responsable de endeudar al país, de promover todas las políticas de ajuste, se le ha pagado hasta el último centavo de una deuda fraudulenta, 10.000 millones de dólares.

La ocupación de Malvinas por parte de la dictadura militar expresó un nivel de choque con el imperialismo, como también la declaración del default de la deuda externa argentina por parte de Rodríguez Saa con el apoyo del Congreso, -el mayor default de la historia hasta ese momento-. La reciente expropiación con pago del 51% de las acciones de Repsol en YPF es una medida que afecta a un sector del imperialismo concreto, a Repsol y los grupos financieros detrás suyo. Pero abre las puertas a la asociación de YPF con otros sectores multinacionales en la explotación petrolera. Fue un choque también la anulación



de los contratos de aguas, IBM o con Siemens, ante violaciones escandalosas de los contratos o casos de corrupción extraordinaria. Estos casos, ¿son medidas aisladas?, o, ¿forman parte de una política burguesa de recuperación de la soberanía nacional? Ni la ocupación de Malvinas, ni la declaración del default, ni el rescate con pago de las acciones de YPF, permite afirmar que los gobiernos que protagonizaron estos hechos sean nacionalistas o que estén en ruptura con el imperialismo.

¿Qué medidas concretas ha tomado el Gobierno nacional contra el dominio imperialista sobre la Nación? Medidas elementales de soberanía como establecer la nacionalización de la banca y el comercio exterior no se han aplicado, tampoco se ha revertido el proceso de privatización y entrega de los años 90. El Gobierno tiene una política de convivencia con los grandes grupos económicos. Cuando fue la huelga y ocupación de la empresa multinacional Kraft mandó la policía y la gendarmería, procesó a los luchadores e hicieron inteligencia contra ellos. Lo mismo ha hecho para defender los intereses petroleros de las multinacionales militarizando las zonas más radicalizadas. Para la burguesía y su gobierno el enemigo a derrotar son los trabajadores para defender la política de la patronal imperialista. La represión a los luchadores contra la megaminería multinacional tiene el mismo sentido.

El gobierno sigue respetando los tribunales internacionales del CIADI, (que depende del Banco Mundial) para resolver los conflictos con las empresas multinacionales, por encima de la legislación nacional. No todos los países han adherido a esos tribunales. Brasil nunca formó parte,

1 Declaração de insolvência do devedor, decretada pelos credores quando as dívidas não são pagas nos prazos estabelecidos.

Bolivia, Ecuador y Venezuela han renunciado. La Argentina se sumó en 1999, dos meses después que Cavallo asumiera como ministro de economía de Menem. En el Ciadi no se permite apelación a sus fallos y quienes demandan son siempre las empresas contra los Estados.

El apoyo a EEUU contra Irán es un escándalo, sumándose a los argumentos que esgrimen las potencias para seguir preparando las condiciones del ataque. Utilizan el caso del atentado contra la AMIA para culpar al gobierno iraní, cuando lo único que está demostrado es que todo el proceso judicial ha sido una maniobra fraudulenta para orientar las acusaciones en ese sentido.

La Ley antiterrorista ha sido impulsada por el Gobierno por recomendación de organismos del imperialismo (GAFI y el G20), en nombre de combatir al lavado de dinero y al terrorismo, se dirige contra los que salen a luchar.

El Gobierno mantiene la presencia de fuerzas militares en Haití para garantizar “la paz”, es decir para impedir que una rebelión popular barra con todo el régimen. Las fuerzas militares ocupan el papel que EE.UU. no podía cumplir directamente.

Los negocios mineros abiertamente respaldados e impulsados por el kirchenerismo se apoya en una legislación antinacional que concede beneficios extraordinarios a las mineras que configuran un Estado supranacional sobre la Cordillera, con sus propias reglas. Es una de las entregas más alevosas de la soberanía nacional.

La explotación petrolera sigue dominada por multinacionales. El gobierno Kirchner firmó todos los balances de YPF hasta el 2011, avalando la política de vaciamiento que llevaba adelante Repsol. La empresa ahora controlada por el Estado nacional y provinciales se orienta a nuevos acuerdos con multinacionales. No hay una política de recuperar la soberanía sobre toda la explotación petrolera, que solo es posible nacionalizándola sin pago.

Las multinacionales más poderosas instaladas en el país están manchadas de sangre por la represión a sus trabajadores, por el respaldo a los golpes militares. La Presidenta

cuando visita la planta de Ford y llena de elogios a la empresa no señala que allí hubo un centro de detención, que obreros de esa fábrica fueron detenidos, desaparecidos. Las multinacionales tuvieron una actuación destacada en todos los golpes militares en Argentina, sin embargo siguen intocables.

¿qué medidas debería haber adoptado el gobierno en defensa de la soberanía nacional, para que pudiera ser considerado como nacionalista?

Desconocer toda la deuda externa, investigar toda la deuda pagada, estatizar la banca

Anular las privatizaciones. Expulsar al imperialismo de todos los rubros vitales de la economía

Imponer el monopolio estatal del comercio exterior, concentrando el manejo de todas las divisas, sacándolo de la órbita de un puñado de multinacionales

- Renunciar al Ciadi

Romper todos los acuerdos militares y diplomáticos con el imperialismo. Rechazar la instalación de una Base militar en Chaco.

Promover la investigación y castigo a las empresas y los directivos de las multinacionales que como Ford y Mercedes Benz ordenaron la represión sobre los trabajadores de sus plantas.

El gobierno y sus simpatizantes presentan medidas aisladas, limitadas, superficiales y desesperadas ante la crisis internacional como una defensa de la soberanía nacional, para promover las ilusiones y mostrarse como la única alternativa política para la mayoría. Tenemos la obligación de demostrar pacientemente la naturaleza de cada medida para ayudar a madurar la ruptura con esta política desde una perspectiva proletaria.

Solo la clase obrera es consecuentemente antiimperialista y podrá resolver las tareas democráticas y nacionales que la burguesía no realizó ni podrá. La burguesía es una clase antinacional, entrelazada con el capital financiero internacional, aunque de vez en cuando pueda tener algún roce o choque aislado con algún sector.

## Argentina

**El gobierno argentino se hizo cargo del 51% de las acciones de YPF y declara su objetivo de asociarse con otras multinacionales**

**La tarea: expropiar sin pago toda la industria hidrocarburífera, desde los yacimientos hasta las refinerías y la distribución, bajo control obrero colectivo**

La medida del Gobierno Kirchner de expropiar con pago el 51% de las acciones de YPF de manos de Repsol es una medida desesperada, producto del desastre privatista y tam-

bién de la llamada “argentinización” puesta en marcha por Néstor Kirchner, que llevaron a la pérdida del autoabastecimiento energético, al fuerte incremento de las importaciones

de combustibles que generó una salida extraordinaria de divisas en 2011, situación que se hubiera agravado este año.

YPF fue privatizada completamente en 1999 por Menem con el apoyo de Néstor Kirchner. El Proceso de privatización había comenzado en 1992 transformando YPF en una sociedad por acciones, reestructurándola para facilitar su privatización parcial. Al mismo tiempo el gobierno nacional transfirió a las provincias el dominio público de los yacimientos.

La medida del gobierno de Cristina Kirchner de tomar la mayoría de las acciones de YPF fue un choque con la multinacional Repsol, que se expandió internacionalmente a partir de comprar YPF (Alaska, Brasil, Golfo de México, Caribe, Argelia, Libia). Al momento de la *expropiación* estaba negociando con empresas chinas entregar los ricos yacimientos de Vaca Muerta. El gobierno español, seguido por la Comunidad Europea anunciaron sanciones contra Argentina, EE.UU. y México se solidarizaron con España, que se colocaba como víctima del *populismo* argentino.

YPF era una empresa de origen estatal fundada en 1922. La empresa al igual que sucedió con otras privatizadas como Aerolíneas Argentinas, fue vaciada. Repsol se llevó todas las utilidades de la empresa al punto de recuperar prácticamente el precio de compra de la petrolera (15.000 millones de dólares). Su política se basó en inversión mínima en exploración de nuevos pozos de petróleo y gas y exprimir los que ya estaban operando.

Las enormes utilidades de YPF se basaron en el bajo costo del barril de petróleo, los elevados precios internos e internacionales, subsidios del gobierno y superexplotación obrera. La actividad petrolera es una de las más regimentadas, con condiciones de trabajo de represión total, con contratos flexibilizados, introduciendo convenios como UOCRA –construcción- en tareas que son parte del convenio petrolero, -con remuneraciones mucho más elevadas-. La cantidad de trabajadores de YPF pasó de 23.300 en 1991 a 5.700 en 1995.

El Gobierno Kirchner aprobó todos los balances de YPF hasta el año pasado por medio de su representante en el directorio de la empresa. Conocía en detalle el procedimiento de vaciamiento por parte de Repsol. Fue cómplice de esa política. Sólo los dividendos del último año por 1.200 millones no fueron autorizados a remesar al exterior. En abril de 2011, hace apenas un año, el gobierno nacional y los provinciales extendieron las licencias que vencían en 2017 por 10 años más y asignaron nuevas áreas a la petrolera.

En 2008 Kirchner había puesto en marcha lo que denominaba “argentinar” la empresa, metiendo como accionistas y en el directorio de YPF al grupo Eskenazi, sin poner dinero, tomando deudas incluso con Repsol para comprar el 15% de las acciones (con opción a otro 10%), sobre la base de garantizarles la máxima distribución de utilidades, es decir, legalizar el vaciamiento que el Gobierno denuncia ahora.

La gran mayoría de la población ha recibido la mentada “nacionalización” con simpatía, como una recuperación del patrimonio nacional, como lo ha querido presentar el gobierno. Una amplia mayoría de los legisladores ha votado la ley de expropiación, incluyendo a los partidos más grandes de

la oposición burguesa, los que hace 13 años votaban la entregada de YPF. Los simpatizantes del gobierno que hoy se presentan embanderados con la soberanía y el recupero del petróleo ocultan que durante 8 años el gobierno ha actuado como socio de Repsol facilitándole el saqueo.

Con toda la exploración, extracción, distribución en manos de las multinacionales, éstas tomaron al Estado por el cuello y ejercieron una política de extorsión para imponer 1) continuos incrementos de los precios internos hasta alcanzar prácticamente los niveles internacionales; 2) menores retenciones a las exportaciones de crudo; 3) ser ellos mismos quienes importen los combustibles faltantes para abastecer la demanda del mercado interno; 4) una política de subsidios para promover una mayor producción.

Con estas políticas, la exploración, la producción, y las reservas, fueron cayendo dramáticamente, obligando al gobierno a importar cada vez más, consumiendo buena parte de las divisas que genera el comercio exterior. En 12 años la participación de YPF en el mercado interno pasó del 50% a un 34%.

La crisis no solo fue generada por Repsol, dueña mayoritaria de YPF –la empresa más grande del país-, sino por todas las petroleras, que actuaron de la misma forma.

Esta “nacionalización” con pago de la actividad petrolera es parcial. Es sólo en YPF y se toma el 51% de las acciones de la sociedad anónima. Repsol ya ha demandado al gobierno en los tribunales internacionales exigiendo una jugosa compensación. El gobierno argentino aún mantiene su adhesión al tribunal internacional del capital financiero Ciadi, donde Repsol reclama el pago de las acciones (el gobierno resigna así soberanía, permitiendo que este conflicto no se resuelva en los tribunales argentinos). La multinacional que pretende miles de millones por las acciones debería afrontar antes todos los juicios por los desastres ecológicos que ha dejado (y que al kirchnerismo recién ahora denuncia públicamente). También han dejado una deuda financiera de 9.000 millones de dólares que debe ser desconocida. Todo ese dinero se utilizó para la fuga de divisas, no para inversión productiva, (si Repsol no hubiera distribuido la totalidad de las ganancias, no habría necesitado tomar esos préstamos). El gobierno de Kirchner pagará por la nacionalización del 51% de las acciones, pagará la deuda externa contraída por YPF, y se asociará con otras multinacionales para explotar el petróleo, debemos denunciar toda su demagogia nacionalista y mentirosa.

Ahora la conducción de la empresa está en manos de funcionarios designados por el gobierno nacional. Se incorporaron al directorio representantes de las provincias petroleras, que tendrán la mitad de las acciones del Estado, y un representante de la burocracia sindical del petróleo. El 49% de las acciones queda en manos privadas. Una parte en manos de Repsol, otra el grupo Eskenazi, otra en manos de accionistas individuales, y otra en manos del mexicano Carlos Slim que se quedó con parte de las acciones que garantizaban préstamos a Eskenazi (socio mayoritario del Banco de Santa Cruz).

Desde el principio el gobierno aclaró que sale a buscar so-

cios internacionales, es decir multinacionales como Chevron, Exxon, Total, etc. para invertir en YPF y compartir la explotación de yacimientos de shale oil –petróleo no convencional- como Vaca Muerta. YPF ha sido descapitalizada porque la totalidad de sus utilidades fueron transferidas al exterior dejándola sin recursos financieros. Pero es falso que la actividad petrolera solo se pueda desarrollar sobre la base de inversiones extranjeras. YPF fue puesta en pie por parte del Estado nacional, fue la primera petrolera estatal, con muchos menos recursos que los que se cuenta hoy. Lo que no hay por parte del gobierno es voluntad política de chocar con el imperialismo. No hay voluntad de la burguesía de estatizar, y cuando lo hace es porque no tiene más remedio. Por eso la Presidenta se encargó de señalar que buscarían socios internacionales (y quedó previsto en el texto de la Ley, -art. 2º y art. 17º-) y buscó para dirigir la empresa a un director de una multinacional (la petrolera Schlumberger).

Los acuerdos con las multinacionales serán bajo las condiciones de estas, que buscan asegurarse precios internacionales, elevada rentabilidad, seguridad jurídica, provisión de equipos y tecnología bajo su control, etc. Bien lejos de la autoproclamada soberanía nacional y recuperación patrimonial. La convivencia de la empresa bajo control estatal y las multinacionales será bajo el dominio de estas últimas. Tienen interés de generar excedentes de producción que se puedan exportar a precio internacional para multiplicar sus ganancias, contribuyendo a elevar exportaciones y generar divisas para el país. El pretendido control a la actividad petrolera por parte del gobierno fracasará como fracasó en el pasado. Sólo la clase obrera, colectivamente, puede ejercer un verdadero control.

La nueva conducción de YPF ha logrado incrementar la producción y refinamiento aún con su escasez de recursos y está saliendo de la crisis de stock mínimo, por la caída de la demanda interna debido al freno de la economía. Pero YPF corre el peligro, como ya ha ocurrido en el pasado, que grupos empresarios nacionales se transforman en sus subcontratistas actuando en forma totalmente parasitaria, con contratos leoninos, absorbiendo parte de sus recursos y también que le coloquen cantidad de funcionarios rentados sin actividad productiva en la empresa.

El precio de los combustibles no se ha reducido, siendo un componente fundamental de la elevada inflación que sufrimos. Tampoco se da por finalizada la flexibilización laboral. Las petroleras multinacionales se seguirán aprovechando de los esfuerzos de exploración y también de la formación de profesionales en el área, absorbiéndolos con el menor esfuerzo.

Sólo la clase obrera tiene una política de defensa de la soberanía nacional, antimperialista, que plantea que toda la explotación energética, desde los yacimientos y refinerías hasta la distribución debe ser expropiada sin pago. Es una actividad vital, estratégica para la economía y no puede quedar en manos de transnacionales. Claro que esta política no va a ser impuesta por medio de solicitudes, documentales, denuncias y leyes, –que son bienvenidas-, sólo podrá ser impuesta por medio de la acción directa de masas, ocupando los pozos, las refinerías, los ductos, etc. La clase obrera tiene un plan para



reorganizar la economía sobre otras bases, limitando fuertemente la dependencia del petróleo, impulsando el desarrollo de otras fuentes de generación de energía y privilegiando el transporte ferroviario, el transporte colectivo por encima del transporte individual, cuidando de resguardar al máximo posible la ecología de las zonas de explotación y seguramente a incrementar las reservas antes que a exportar el recurso. Esta política se opone totalmente a la política del imperialismo aplicada por todos los gobiernos burgueses.

La izquierda centrista que puede llegar a mencionar la tarea de expropiar sin pago omite señalar que esta tarea sólo le puede ser impuesta a la burguesía por la acción directa de masas, en primer lugar de los propios obreros del petróleo, y nunca por medio de leyes.

Sólo la clase obrera se enfrenta consecuentemente a las multinacionales. En Cerro Dragón uno de los yacimientos más importantes del país, que produce más del 20% del crudo, está instalada la multinacional PAE (Pan American Energy), propiedad de Bulgheroni, British Petroleum y la china Cnooc. A esta petrolera le han extendido las licencias de exploración hasta el 2027 con opción hasta el 2047. ¿Quién hizo esta concesión? El gobierno de Kirchner, asociado con el exgobernador Das Neves y el actual gobernador Buzzi. En este yacimiento los Dragones, los valientes obreros petroleros, bajo convenio de la construcción una y otra vez paralizan los pozos, arman piquetes, y se enfrentan a la poderosa patronal que cuenta con su policía privada y la provincial y a veces hasta los gendarmes.

En Las Heras, a pocos kilómetros, las continuas luchas obreras de los petroleros han tenido como respuesta por parte del gobierno la militarización completa de la zona, que no duda en aliarse con las multinacionales contra los trabajadores.

En esa resistencia radical de los obreros reside la verdadera y única respuesta coherente frente a las empresas que superexplotan, saquean nuestras riquezas, contaminan regiones enteras, para luego dejar un desierto. Ellos expresan en su instinto la rebelión de las fuerzas productivas encadenadas por la gran propiedad privada en manos de las transnacionales.

**Declaración del CERCI ante el golpe de Estado en Paraguay**

## **Por un tribunal Popular para castigar los asesinos y entregar la tierra a los campesinos**



La decisión del Parlamento de destituir al Presidente de la República, Fernando Lugo, el día 22 de junio, oscureció el asesinato de 11 campesinos.

El 15 de junio, la policía atacó a los sin tierra que ocupaban una estancia del latifundista y ex senador Blas Riquelme. Esta vez, los campesinos no se sometieron a la fuerza militar y resistieron. En legítima autodefensa dejaron un saldo de 6 muertos entre los agentes de la represión.

Según las autoridades, la resistencia armada se debió al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). La Liga Nacional de los Carperos puso en duda que los sin tierra tuviesen capacidad militar para imponer tantas bajas a la Policía Nacional. El líder José Rodríguez sospecha que la *“confrontación puede haber sido provocada por la policía”*. Es sintomático que los periodistas fueran impedidos de tener acceso al conflicto y pudiesen informar sobre las condiciones en que ocurrieron las muertes. Solamente un Tribunal Popular podrá investigar los acontecimientos que resultaron en la muerte de 11 campesinos y en 80 heridos.

El punto de partida de la investigación comienza en la tremenda opresión que sufren los pobres del campo, que soportan el peso de la gigantesca concentración de tierras. La burguesía paraguaya, su fracción oligárquica y su Estado son responsables por el derramamiento de sangre

de los campesinos que no hacían sino luchar por la expropiación de las tierras y ponerlas bajo su control colectivo.

La resistencia campesina es parte de la lucha de clases contra el poderío latifundista, emanado de la gran propiedad privada de los medios de producción y del Estado. Las tierras ocupadas en Colonia Ybyrá Pytá, en el departamento de Canindeyú, constituían un área de conflicto desde hace dos años. Los campesinos exigían que Fernando Lugo cumpliera su promesa de reforma agraria, bandera que le sirvió para conquistar votos en el campo en las elecciones de 2008 y llevar al poder la coalición de la izquierda burguesa, la Alianza Patriótica para el Cambio (APC).

La población oprimida por la oligarquía latifundista alimentó la ilusión de que con la derrota del viejo Partido Colorado se abrirían nuevas condiciones económicas y políticas favorables a los explotados. Las masas esperanzadas no podían imaginar que sería bajo el gobierno reformista de Lugo que sucedería una violenta represión a los sin tierra y la masacre de Canindeyú.

El cambio de fuerza política en el Estado, después de un largo período de dictadura, constituida por el general Alfredo Stroessner y ejercida por el Partido Colorado, se dio en el seno de la política burguesa. Demostró que no era posible deshacerse del viejo poderío latifundista por la

vía electoral. Las instituciones reaccionarias de Stroessner no fueron desmanteladas y el Partido Colorado continuó dictando el curso de los acontecimientos en el país.

Lugo llegó al poder en una profunda situación de desintegración de la hegemonía del Partido Colorado, que mantenía el poder desde hace 61 años. La caída del general Stroessner en febrero de 1989, por medio de un golpe militar, abrió un período de inestabilidad política. El asesinato del vice-presidente, Luis María Argaña, en marzo de 1999, expuso al país a la disputa gangsteril entre los líderes de la política burguesa. En esta crisis, las masas fueron a las calles exigiendo la caída del gobierno de Raúl Cubas. Lo que resultó en muertes de manifestantes. El general golpista Lino Oviedo y Raúl Cubas fueron responsabilizados por los crímenes. Después de un breve período de detención, los facinerosos volvieron a influir el proceso político del país.

Contra esos mafiosos de la política burguesa, la figura del padre Fernando Lugo, vinculado a la Teoría de la Liberación, ganó fuerza entre los explotados y se elevó al poder del Estado. Derrotó la candidatura colorada de Blanca Ovelar e del general Oviedo, que se candidateó por la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (UNACE), partido que surgió de las entrañas del viejo Colorado. Sin embargo, el gobierno de Lugo rápidamente se adaptó al poder burgués, sometiéndose al viejo poder de los colorados.

Esa experiencia demuestra que el reordenamiento de fuerzas en el seno de la política burguesa en crisis, en que la democracia electoral permitió el ascenso de un partido no identificado con la reacción conservadora, como fue el caso de Lugo, no hace más que proteger el poder burgués de la ofensiva de las masas que pueden avanzar por la vía revolucionaria.

Da cuenta que el reformismo se constituye como una solución para la desintegración de los viejos partidos, que se encuentran desmoralizados frente a la mayoría explotada. Solución que no es más que la de desviar el curso del choque de las masas contra el estado.

El reformismo, que se presenta como una vía de solución a las aspiraciones de los explotados y de las tareas democráticas del país atrasado y semi-colonial, se revela impotente frente a las leyes económicas del capitalismo decadente y frente a la burguesía interna y el imperialismo. Es lo que sucede con el gobierno Lugo que no fue capaz de materializar la bandera de la reforma agraria, que se mostró ser vil al poder militar, que se sometió al predominio de los colorados en el Parlamento y que al final fue apartado de la presidencia por medio de un golpe del Congreso.

En 36 horas, los parlamentares aprobaron la interpelación. La base de sustentación de Lugo, "*Alianza Patriótica para el Cambio*", liderada por el vice-presidente Federico Franco del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) se unió casi íntegramente a los colorados para destituir al presidente. No hubo una mínima resistencia en el congreso

al golpe. El Parlamento como un todo expresó el dominio oligárquico latifundista. Y el presidente depuesto no contó con un levante popular, a no ser una ligera manifestación de sus partidarios frente al Congreso Nacional.

Faltando nueve meses para terminar el mandato, Lugo ya no gobernaba. La matanza de 11 sin tierras en el departamento de Canindeyú fue tan sólo más un motivo para que los senadores lo cesaran de su mandato.

El movimiento campesino ganó fuerza bajo el gobierno de Lugo. El choque contra los grandes productores de soja brasileños, que poseen grandes áreas en el Paraguay, indicó la profundidad de la crisis política. El movimiento sin tierra estuvo a un paso de confrontar con la represión y con el propio gobierno que les prometió la reforma agraria, pero se mostró obediente a las presiones de los latifundistas y el gobierno brasileño. El retroceso provisorio alivió el conflicto entre campesinos y brasiguayos. La ocupación de Colonia Ybyrá Pytá, sin embargo, no tuvo la misma suerte.

El hecho de Lugo haber echado al Ministro del Interior, Carlos Filizzola, y al jefe de la Policía Nacional, Paulino Rojas, demostró que la sangrienta operación no contó directamente con la aprobación del Presidente de la República. Lugo fue a buscar un nuevo ministro en el Partido Colorado, Rubén Candia. A su vez, el nuevo jefe de policía estuvo preso en 2002, bajo acusación de tráfico y falsificación. Se creó un malestar entre los oficiales de escalafones superiores. El Movimiento Agrario de Paraguay exigió que Lugo se decidiera por los campesinos sin tierra o por las armas de la policía. Aunque se tratase de un reclamo quijotesco, evidenció la responsabilidad del presidente por la violencia policial en el cumplimiento del mandato de reintegración de propiedad del área ocupada a favor del latifundista.

En esta inestable posición gubernamental, los senadores sacaron del cajón la interpelación para destituirlo. La rapidez con la que se actuó sirvió para el Congreso mostrar a la población que Lugo ya no gobernaba y también para amortiguar el impacto de las muertes.

Los gobiernos brasilero y chileno cuestionaron la interpelación bajo el argumento que no se le dio a Lugo el derecho de legítima defensa. Los gobiernos de Argentina, Venezuela, Ecuador y Bolivia la caracterizaron como un golpe. La sombra de la destitución del presidente de Honduras, Manuel Zelaya, en junio de 2009, se proyectó sobre Paraguay y desde ahí sobre los países del Mercosur, la UNASUR y de la OEA. No había como decir que no ocurrió un golpe contra el presidente electo del Paraguay. En el caso de Honduras, los Estados Unidos disciplinaron la rebeldía de Brasil y los aliados a favor de Zelaya. Ahora, Lugo decidió constituir un gobierno paralelo y esperar que Brasil lidere un movimiento por su restitución. Los explotados paraguayos no deben permitir ninguna intervención externa y tomar el problema en sus manos.

Como puede verse, el presidente destituido no convocó la población a se rebelar contra los golpistas. Una novela

de tipo Honduras es la más probable. El primer capítulo se desarrolla con Lugo recurriendo a la Suprema Corte para que anulase la interpelación. Pero los jueces no hicieron sino confirmar la constitucionalidad argumentada por el Parlamento golpista. La Iglesia ya dio su bendición a Federico Franco. En la reunión del Mercosur no podrá participar el nuevo presidente. La cláusula que exige el respeto a la democracia fue violada. Según la caracterización de sus miembros, debido a la interpelación y destitución sumaria y no porque solamente el pueblo que eligió Lugo pudiese destituirlo.

La violencia desatada contra los campesinos resultó del derecho burgués de defensa de la propiedad privada. Esa misma propiedad constituye la base del ordenamiento político e ideológico de la democracia. El golpe institucional, que no necesitó esta vez del concurso de las Fuerzas Armadas, esta al servicio de la oligarquía latifundista. El papel de los gobiernos que juran ser democráticos, por lo tanto, será el de encontrar una salida que mantenga condenado al movimiento campesino y la protección a los grandes propietarios, incluyendo los capitalistas brasileros que succionan las riquezas del país vecino. No hay ninguna duda que debemos denunciar al golpe, pero también responsabilizar al gobierno de Lugo por la sangre de los pobres derramada en el departamento de Canindeyú.

La tarea que se impone para el movimiento revolucio-

nario en el Paraguay es la de rechazar cualquiera que sea el gobierno burgués. No hay otra salida sino organizar alrededor de la lucha por un gobierno obrero y campesino, que resulte del derrumbe de la burguesía del poder del Estado. No desconocemos que no existe un partido marxista-leninista-trotskista que pueda ocupar el lugar de dirección en el seno de las masas explotadas. Lo que imposibilita desenvolver la estrategia del gobierno obrero y campesino. Sin embargo, esa es la tarea.

La ausencia de la dirección revolucionaria será superada con la vanguardia reconociendo la estrategia del proletariado frente a la crisis de la burguesía y trabajando para que ese objetivo sea alcanzado. El destacamento consciente no debe involucrarse en la disputa interburguesa sobre la violación a la democracia. Al contrario, debe posicionarse en primer lugar el asesinato de los campesinos, la exigencia de castigar a los crímenes de la burguesía y la expropiación de los latifundios por la acción de los pobres del campo, en alianza con la clase obrera.

La clase obrera y los campesinos de América Latina tienen el deber de denunciar las maniobras de sus gobiernos que vomitan la democracia ejerciendo la dictadura de clase de los explotadores sobre la mayoría explotada. Levantamos la bandera de constitución de un Tribunal Popular para investigar y castigar los crímenes de los opresores contra los campesinos.

## Resolución sobre Paraguay

1. Lo fundamental de la crisis política que condujo a la destitución del Presidente de la República del Paraguay, Fernando Lugo, es la violencia reaccionaria del Estado burgués contra los campesinos que ocupaban la hacienda del latifundista y ex senador Blas N. Riquelme. La orden para usar la fuerza por parte de la policía nacional contra los sin tierra partió del ministro del interior. La operación que movilizó cerca de 300 efectivos demostró que fue planificada como una operación de guerra. Las autoridades contabilizaron 11 trabajadores muertos y una centena de heridos. Cuerpos fueron hallados en el bosque, indicando que hubo fusilamientos. Del lado de la represión murieron 6. El movimiento campesino pone en duda tamaña capacidad de resistencia. El gobierno acusó al *Ejército del Pueblo Paraguayo* (EPP). Sin embargo, se sospecha de un complot urdido en el interior del aparato represivo. Pero esa duda no debe ocultar lo esencial. La resistencia armada de los pobres del campo contra la minoría opresora es parte de la lucha de clases y debe ser defendida como un derecho. Las autoridades paraguayas y la prensa controlada por la oligarquía hicieron mucho barullo sobre la muerte de los policías. Pero, escondieron la identidad de los campesinos brutalmente asesinados. Mintieron en relación a la capacidad de armamento de los sin tierra. Trataron así de obscurecer la responsabilidad del Estado y la oligarquía dominante por la masacre en el Departamento de Canindeyú. En

nombre de la clase obrera y los campesinos de América Latina, el Comité de Enlace por la Reconstrucción de la Cuarta Internacional denuncia a la burguesía paraguaya, al gobierno Lugo, a los partidos que componen el orden político del país, a los medios de comunicación y todos los que se callaron frente a la barbarie desencadenada contra los pobres del campo. El Comité de Enlace defiende que se constituya un Tribunal Popular creado en el seno de los explotados para investigar los hechos en el Departamento de Canendiyú y punir los crímenes de la burguesía contra los pobres del campo.

2. El golpe de Estado desencadenado por el Congreso Nacional que derribó a Fernando Lugo no se debió al hecho de que éste defienda a los campesinos contra los terratenientes y multinacionales, sino a que mostró ser un títere inútil para los intereses del capital. Las masas empobrecidas lo llevaron al poder por medio de las elecciones, creyendo alcanzar por esa vía la solución de sus aspiraciones y resolver el problema inmediato del hambre. El frente amplio que lo apoyó (Alianza Patriótica para el Cambio), del cual participaba el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), convenció a los campesinos que su victoria electoral abriría las puertas para la reforma agraria. Uno de los mayores obstáculos para realizar la desconcentración de la propiedad agraria y permitir el acceso a la tierra por los pobres del campo es el viejo Partido Colorado. Derrotarlo sería un paso importante

para que un nuevo gobierno progresista inicie las transformaciones económicas y sociales en el Paraguay. Pero la demagogia reformista pequeño burguesa no resistió a las reales fuerzas sociales en conflicto. Lugo y su Alianza Patriótica para el Cambio rápidamente se adaptaron al dominio de los colorados, es decir, de la oligarquía agraria y el imperialismo norteamericano, así como a los intereses de la burguesía brasileña. Los explotadores internos y saqueadores externos no pueden acusar al cura de la teología de la liberación, hecho presidente, de provocar cualquier ruptura del orden. Fernando Lugo se sometió a la gran propiedad, a la agroindustria, a los explotadores y a las multinacionales. Tres posiciones destacaron el servilismo del gobierno



que se pretendía reformista: apertura de las fronteras nacionales para mayor penetración del capital multinacional, facilitación a la presencia militar de los Estados Unidos en país y cumplimiento de las exigencias del gobierno brasileño de mantener los acuerdos contraídos en la época de la dictadura de Stroessner (Itaipú) y garantía a los brasiguayos. La negativa del Senado al ingreso de Venezuela al MERCOSUR, contra la voluntad de todos los demás miembros, muestra hasta que punto la Casa Blanca maneja el poder real del Estado paraguayo. El apoyo del gobierno Lugo a la causa de los colonizadores extranjeros (brasiguayos) contra los campesinos que ocuparon las tierras del sojero Tranquilo Favero en el conflicto de Ñacunday, fue el punto final a la retórica sobre la reforma agraria. Lugo dejó claro a la Liga Nacional de los Carperos que sobre el movimiento sin-tierra estaban la ley y la justicia, creadas por la oligarquía a lo largo de la historia del Paraguay. De nada sirvió que la Comisión de Verdad y Justicia denunciara en su informe sobre los derechos humanos que la dictadura del general Stroessner legalizó 6,75 millones de hectáreas a favor de sus cómplices que usurparon tierras públicas. Ni que en los quince años posteriores a su caída en 1989, un millón de hectáreas tuvo el mismo destino. Dada la gigantesca concentración agraria y el avance de la agroindustria, la lucha de clases en el campo se amplió y se agudizó. La derecha, encabezada por el Partido Colorado, acusó al gobierno Lugo de ser incapaz de contener las ocupaciones de tierra. Lo responsabilizó por la inercia para aplastar al EPP y de acabar con la supuesta influencia de las FARCS colombiana en la región norte del país. El Partido Liberal Radical Auténtico, base de sustentación del gobierno, a su vez siguió la misma línea. Lugo ya no gobernaba. Y su vice, Federico Franco, conspiraba con los colorados. El ataque policial a los campesinos en el

Departamento de Canideyú y el saldo sangriento sirvieron como las últimas justificaciones para efectuar el golpe de Estado.

3. El *Juicio Político* asombró a los gobiernos del MERCOSUR y UNASUR. La operación quirúrgica del Congreso Nacional fue cuestionada. Lugo podría ser sustituido por el Parlamento, pero tendrían que haberle dado derecho a defensa. El golpe fue preparado dentro de la legalidad, de acuerdo a la Constitución. El Presidente electo no responde a quienes lo eligieron. El pueblo que lo colocó en la Presidencia mediante el voto, no tiene poder para destituirlo. El poder de destitución está en las manos del Congreso Nacional. De acuerdo con este precepto constitucional, tener o no tener derecho a defensa no pasa de una formalidad jurídica. En la democracia burguesa no existe soberanía popular. No es real el precepto democrático que el poder emana del pueblo. La máscara legalista que sirvió al golpe anuló el democratismo de los gobiernos denominados de izquierda, popular o progresistas, que se limitaron a reclamar por la rapidez del proceso de destitución e imposibilidad de defensa del Presidente. Los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina lo caracterizaron como golpe de Estado. Los gobiernos del Brasil y de Chile fueron más cautelosos. Por medio de la OEA, los Estados Unidos defendieron la constitucionalidad del *Juicio Político*. México, Colombia y Perú, alineados a los Estados Unidos reconocieron al nuevo gobierno de Federico Franco. Los trajines demagógicos del MERCOSUR y UNASUR en torno a las cláusulas democráticas no resiste a las tendencias de las burguesías semi-coloniales, sometidas hasta el alma al imperialismo. La garantía del golpe contra el gobierno de Manuel Zelaya en junio de 2009, en Honduras, dada por los Estados Unidos, mostró la impotencia democrática de los gobiernos de "izquierda", que concluyeron finalmente bajando la cabeza. Es lo que

se repite ahora en el caso del Paraguay. No hay acontecimiento político de importancia en que no esté presente el imperialismo. Para cuestionar verdaderamente el golpe es necesario rechazar la intervención norteamericana. Es lo que se verificó en Honduras y es lo que se verifica en el Paraguay. En mayor o menor grado, los gobiernos latino-americanos que criticaron o que rechazaron la medida golpista del Congreso Nacional, están subordinados, atados o condicionados al imperialismo. Saben que el golpe no se asienta sólo en las presiones de la oligarquía paraguaya sino también en las de las multinacionales como Monsanto, Cargill, Rio Tinto, etc. Obligatoriamente, una posición contraria al golpismo oligárquico comienza por crear un movimiento anti-imperialista. Existe un vínculo indisoluble entre la debilidad de las burguesías nacionales de las semi-colonias, la inestabilidad de la democracia burguesa y la pesada intervención del imperialismo, con los Estados Unidos a la cabeza. Están en choque con las tareas democráticas no resueltas, como la reforma agraria y con las necesidades fundamentales de la mayoría nacional oprimida. Los gobiernos democratizantes y supuestamente reformistas se enfrentan con la reacción oligárquica y con los intereses del capital imperialista. El gobierno Lugo y su Frente Amplio inevitablemente se descompusieron. No fueron capaces de cumplir la promesa de reforma agraria y de soberanía del Paraguay. La violencia desatada contra los sin tierra en Canindeyú demostró el precipicio que separaba al gobierno de los explotados. Lugo aceptó su destitución sin la menor resistencia. Recorrió a la Corte Suprema. Esta consideró legal el golpe. La iglesia bendijo al golpista Federico Franco. De esa forma se legitimó internamente el *Juicio Político* y externamente sirvió como defensa frente a las críticas de los aliados de Lugo. Esa es la razón porque las masas no salieron a las calles para defender su gobierno contra el Golpe de Estado. No podrían identificarlo como su gobierno. De hecho no lo era, nunca lo fue. Le sirvieron tan sólo como instrumento para formar un gobierno burgués con pretensiones reformistas. Esa es la razón por la que el Presidente depuesto buscó amparo en la justicia burguesa y rechazó la posibilidad de las masas salir a la calle contra el Congreso Nacional, la oligarquía y el imperialismo. Federico Franco usó el mismo argumento de evitar una "guerra civil" para justificar el *Juicio Político* de Lugo sin necesidad de derecho a defensa. Lugo y Franco ocuparon la misma posición en la crisis política frente al pueblo paraguayo – evitar la intervención de las masas y la convulsión social.

4. Es necesario extraer de los hechos que resultaron en la masacre de los campesinos de Canendiyú y el golpe de Estado las lecciones y conclusiones fundamentales. Comenzando con la necesidad de los oprimidos del campo superar las ilusiones democráticas en la posibilidad de un gobierno reformista resolver su choque con los terratenientes y la agroindustria. Mientras estén bajo la

dirección pequeño-burguesa, que les ofrece el paraíso en el seno del capitalismo, no podrá desarrollarse la lucha de clases en el campo y derrotar a sus esclavizadores. Sin embargo, esta tarea política no podrá ser asimilada y puesta en práctica por los pobres del campo sin que el programa del proletariado de expropiación revolucionaria de la gran propiedad privada de los medios de producción penetre en el movimiento campesino. La alianza obrero-campesina es la condición para que la mayoría nacional oprimida se levante con una fuerza indestructible. El hecho de los sin-tierra de Canindeyú soportar aisladamente todo el peso de la máquina burguesa debe llevar a la conclusión de que ningún sector aisladamente impondrá sus aspiraciones a la burguesía sanguinaria, principalmente arrancarles las tierras. Por más que la burguesía y el imperialismo en el Paraguay se esfuercen para mostrar que la dictadura del general Alfredo Stroessner ya es pasado, y por más que los gobiernos latino-americanos critiquen el golpe palaciano, la democracia siempre será un poder de la oligarquía. La lucha por la tierra no puede ser separada de la lucha revolucionaria por el poder. La masacre de Canindeyú muestra que los explotadores no aceptarían que los campesinos avancen un solo milímetro sobre su sagrada propiedad. Cualquiera que sea el gobierno, más o menos democrático, atacará físicamente a los trabajadores que osen ocupar una de las propiedades. La posición de que bajo un gobierno "progresista", "popular" y "democrático" es posible ocupar tierras y que este bajo la presión ejecutará la reforma agraria es un sueño irresponsable y reaccionario. Para que la lucha por la tierra se imponga debe estar bajo la estrategia de conquista del gobierno obrero y campesino. La alianza de los pobres del campo con los trabajadores urbanos permitirá la caída de la burguesía del poder, la expulsión del imperialismo del país y constitución de la dictadura revolucionaria del proletariado. Solo la democracia de la clase obrera dará plena libertad a los campesinos para que avancen hasta las últimas consecuencias en su aspiración de acceso a la tierra. El poder del Estado obrero estará enteramente al servicio de la nacionalización de las tierras. La expropiación de las multinacionales y de la agroindustria abrirá camino para iniciar el proceso de constitución de la propiedad colectiva y desarrollo de las fuerzas productivas socialistas. El Comité de Enlace reconoce que el gran obstáculo que se interpone entre las masas y el programa proletario es la ausencia de un partido marxista-leninista-trotskista en el Paraguay. Hay que superarlo partiendo de la trágica experiencia en Canendiyú, recuperando la contundente lucha de clases y nacional en la historia del país, apoyándose en las ricas conquistas del movimiento mundial del proletariado. El Comité de Enlace convoca los explotados de todas las latitudes a dar un viva a los mártires de Canendiyú, exigir la punición de los asesinos y apoyar el combate de los campesinos por la expropiación y nacionalización de las tierras.